

**RESUMEN Y PROSPECTIVA**

- El pasado miércoles un numeroso comando armado irrumpió en el penal de Coyuca de Catalán, en Guerrero, para liberar a un presunto secuestrador. Este incidente se suma a varios otros que sugieren que la Familia Michoacana, además de contar con control territorial en la región de Tierra Caliente, también dispone de una red amplia de protección de autoridades. Es probable que, en las próximas semanas, el gobierno federal estime que esta situación es insostenible y que se ejecuten algunas acciones más contundentes para reducir la capacidad de operación de la Familia Michoacana. Lo anterior podría dar lugar, a su vez, a nuevos enfrentamientos y ataques de alto impacto en la región.
- En los últimos nueve años se han registrado 409 fugas o motines en centros de readaptación social (71.1% motines y 28.9% fugas). Los años con el menor número de incidentes han sido 2021 y 2022, donde hubo una disminución del 52.5% en 2021, y se estima que 2022 terminará con otra disminución del 28.5%. Por otra parte, en estos incidentes se han registrado 329 internos fugados, 327 muertes y 735 personas heridas (alrededor del 95.8% de las víctimas son internos). El 66.8% de las fugas o motines se concentra en 10 entidades federativas: Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México, Sonora, y Tabasco.
- Aunque Cajeme, al sur de Sonora, continúa siendo el municipio más violento del estado, si se comparan los primeros tres trimestres de 2021 con el mismo lapso de este año se observa una disminución del casi treinta por ciento en las víctimas letales del crimen organizado —esto a pesar de que se registran disputas constantes entre el Cártel de Caborca, el CJNG y distintas mafias del Cártel de Sinaloa (CDS) en Ciudad Obregón. Sin embargo, la violencia en la entidad es multifactorial y, por tanto, San Luis Río Colorado —localidad ubicada en la frontera con Mexicali (Baja California) y Yuma (Arizona, EE. UU.)— continúa siendo un foco de atención: la disputa interna entre grupos antagónicos del CDS ha incrementado la violencia vinculada a organizaciones criminales en setenta por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Esta dinámica posiblemente continúe colocando al municipio como uno de los más violentos del estado hacia el primer trimestre del próximo año.
- El 04 de diciembre, un comando armado presuntamente integrado por miembros del Cártel de Sinaloa efectuó un ataque al CERESO Cieneguillas, Zacatecas con la aparente

intención de liberar a miembros de su grupo que se encuentran encarcelados ahí. En las últimas semanas, la violencia en Zacatecas ha incrementado drásticamente y podría ser indicativa de que, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, tienen interés por reiniciar la disputa por el control del estado.

- Con la filtración de un informe de la Unidad de Inteligencia Naval de la Armada de México de 2019, esta semana se dio a conocer la supuesta relación del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara con *Los Rojos*, grupo criminal con presencia en el sur del estado. Esta información se publicó en medios nacionales en un contexto de alta inestabilidad política derivada de un conflicto entre la Fiscalía de la CDMX y la Fiscalía de Morelos por la investigación del caso de la muerte de Ariadna Fernández López, el 30 de octubre pasado. Derivado de este conflicto, se acusa al fiscal morelense de una supuesta protección del presunto responsable de la muerte de la joven. Adicionalmente, hay un conflicto entre la oficina del gobernador Cuauhtémoc Blanco y la FGE de Morelos por mutuas acusaciones de colusión con el crimen organizado. Si bien estas acusaciones no han sido confirmadas, por lo general, la presencia de grupos del crimen organizado alrededor de las cabeceras municipales, gobierno estatal e instituciones de procuración de justicia es una tendencia consolidada en la entidad. Por ello, se prevé que, con miras al proceso electoral de 2024, Morelos registre una intensificación de la violencia política en 2023 que afecte la gobernabilidad en varios municipios.

ANÁLISIS



El riesgo de confrontaciones de alto impacto en Tierra Caliente aumenta tras incursión criminal en penal de Coyuca de Catalán

RIESGO DE SEGURIDAD

El pasado miércoles por la mañana, un comando armado liberó a Samuel “N”, “El Vago”, un presunto secuestrador que se encontraba recluso en el penal de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero. La irrupción en el penal fue perpetrada por un comando armado numeroso —80 sicarios, de acuerdo, con los reportes disponibles— y que se planeó con poca anticipación, pues “El Vago” apenas había ingresado en el penal el día previo.

Tras la masacre de una veintena de personas, registrada en octubre pasado en San Miguel Totolapan (otro municipio de la Tierra Caliente de Guerrero), y los numerosos ataques reportados en el sur del Estado de México, el gobierno federal anunció un reforzamiento de la presencia militar en la zona. Sin embargo, la capacidad de operación que el crimen organizado ha demostrado en la región de Tierra Caliente en las últimas semanas, sugiere que los criminales, en particular La Familia Michoacana, además de contar todavía con control territorial, también disponen de una red amplia de protección de autoridades,

incluyendo militares (en este sentido, los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya incluían revelaciones de colusión entre militares y los hermanos Hurtado Olascoaga, líderes de la Familia Michoacana).

Es probable que, durante las próximas semanas, el gobierno federal presione para que se ejecuten algunas acciones más contundentes para reducir el control de la Familia Michoacana en la región. Éstas podrían incluir:

- Rotación de mandos militares.
- Traslado de internos.
- Desarme de corporaciones municipales.
- Detención de alcaldes y otros funcionarios municipales.
- Nuevos operativos para la captura de los hermanos Hurtado Olascoaga.

Cualquiera de estas acciones podría generar una reacción violenta por parte de la Familia Michoacana y los actores que dicha organización controla, incluyendo bloqueos carreteros e incendios de establecimientos e instalaciones públicas.

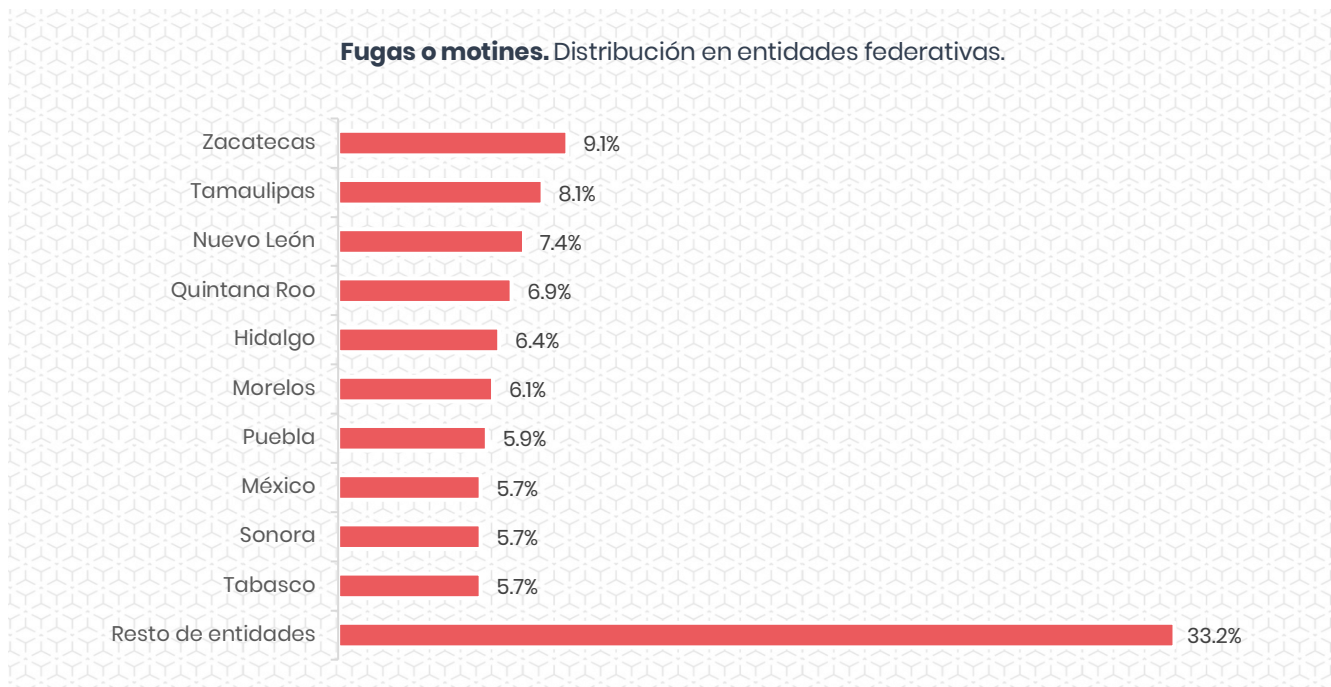


Fuga o motines en centros de readaptación social

ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

En los últimos nueve años se han registrado 409 fugas o motines en centros de readaptación social (71.1% motines y 28.9% fugas). El 60.8% de los incidentes se registraron de 2017 a 2020, mientras que el 12.3% se han observado en 2021 y 2022. En 2021 hubo una disminución anual del 52.5%, y se estima que 2022 terminará con otra disminución anual del 28.5%. A lo largo del periodo analizado se ha registrado lo siguiente:

- Un total de 329 internos fugados, y 327 muertes, de las cuales el 96.0% eran internos, y el resto de las víctimas eran policías estatales. Así también, el 94.3% de las muertes se registraron durante los motines. Por otra parte, también se registraron 735 personas heridas (99.7% en motines), de las cuales 95.6% eran internos, y el resto policías estatales.
- El 66.8% de las fugas o motines se concentra en 10 entidades federativas: Zacatecas (9.1%), Tamaulipas (8.1%), Nuevo León (7.4%), Quintana Roo (6.9%), Hidalgo (6.4%), Morelos (6.1%), Puebla (5.9%), Estado de México (5.7%), Sonora (5.7%), y Tabasco (5.7%). De manera específica:
 - El 48.3% de las fugas se concentraron en seis estados: Hidalgo (12.9%), Sonora (8.6%), Puebla (6.9%), Quintana Roo (6.9%), Zacatecas (6.9%), y Tabasco (6.0%).
 - El 48.2% de los motines se concentraron en seis estados: Zacatecas (10.5%), Nuevo León (9.4%), Tamaulipas (8.4%), Morelos (7.0%), Quintana Roo (6.6%), y Estado de México (6.3%).



Incrementa la violencia sonorense en la región fronteriza con Baja California derivado de disputas internas dentro del CDS

RIESGO DE SEGURIDAD

El sábado 3 de diciembre se registró un enfrentamiento entre un brazo armado afín a Los Guzmán (Los Chapitos o La Chapiza) y Los Rusos —grupo de sicarios de Los Zambada encabezados por Jesús Alexander Sánchez Félix o Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso” —en Mexicali, Los Rusos estaban dirigidos por Felipe Eduardo Barajas Lozano “El Omega” hasta su detención en diciembre de 2021.

- La confrontación ocurrió en las inmediaciones de la Secundaria núm. 14 “Luis B. Sánchez” en la colonia Las Flores, ubicada en la población de Ciudad Coahuila o Estación Coahuila (también denominada en Sonora como Ingeniero Luis B. Sánchez). Se trata de un poblado literalmente entre Baja California y Sonora y sin división territorial —el enfrentamiento, por ejemplo, ocurrió a tres calles de Mexicali (municipio de Baja California).
- Tres personas fueron detenidas por la Fiscalía General de la República y cuatro personas más resultaron lesionadas. Como consecuencia se incrementó la presencia de policías estatales y Ejército mexicano en la región.

Desde 2020 se identifican disputas como resultado del Culiacanazo de octubre de 2019, suceso que cedió a divisiones internas por supuesta falta de apoyo de Los Zambada a Los

Guzmán en el contexto del operativo militar. Aunque esto no ha significado una ruptura definitiva sí se han registrado enfrentamientos constantes en Baja California, en particular tanto en la zona limítrofe entre Mexicali y San Luis Río Colorado como en la comunidad de Los Algodones en la frontera con Yuma (Arizona, EE.UU.).

- Los Rusos se han enfrentado a Los Ninis, sicarios de Los Guzmán, y a brazos armados de Los Salazar (mafia de Sinaloa que ha apoyado a Los Guzmán) como Los Garibay en Mexicali; mientras que en San Luis Río Colorado en Sonora se identifican actividades de Los Cuates —también denominado organización criminal de la familia Lara o Los Mata Salazar—, grupo aliado a Los Rusos.

San Luis Río Colorado registra del primero al tercer trimestre de este año 113 víctimas letales del crimen organizado, se trata de un incremento del 71 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, momento en el que se identificaron 66 casos.

Esta dinámica criminal, sin embargo, no es la única generador de violencia en Sonora, si en la región Frontera la violencia obedece a una disputa interna dentro del Cártel de Sinaloa, en el Sur del estado ésta responde a enfrentamientos entre Los Salazar y Los Guzmán con grupos externos a la federación de Sinaloa: específicamente contra La Plaza, célula del CJNG en Ciudad Obregón (municipio de Cajeme) y que está aliada al Cártel de Caborca de las familias Paéz y Caro Quintero.

- El 7 de diciembre, por ejemplo, La Plaza asesinó a tres integrantes de Los Guzmán y los abandonó cercenados con un mensaje con amenazas en la colonia Infonavit de Ciudad Guzmán, a un costado del estadio de béisbol “Tomás Oroz Gaytán”. Horas previas al homicidio La Plaza difundió un video en redes sociales donde mostraba un interrogatorio de tortura de las víctimas.

Posible retorno de la violencia exacerbada a Zacatecas: el Cártel de Sinaloa y el CJNG muestran que aún tienen intención de disputarlo

DINÁMICA CRIMINAL

El 04 de diciembre, un comando armado presuntamente integrado por miembros del Cártel de Sinaloa efectuó un ataque al CERESO Cieneguillas, ubicado en el municipio del mismo nombre en Zacatecas con la aparente intención de liberar a miembros de su grupo que se encuentran encarcelados ahí.

- Los agresores utilizaron un camión torton para intentar derribar la barda perimetral y, aunque sí consiguieron derribar la primera barrera —una reja alambrada— el camión quedó atascado en la zanja perimetral. Mientras tanto, otros de sus compañeros efectuaron incendios en carreteras y calles próximas para impedir el despliegue de elementos durante el intento de fuga. En las inmediaciones de la prisión, los vehículos incendiados fueron robados con violencia a personas que transitaban por las vías de acceso (carreteras Zacatecas – Aguascalientes y Fresnillo – Jerez).

- Por otro lado, en casetas de cobro ubicadas en Cuauhtémoc (a 50 kilómetros de distancia) y Morfín Chávez (60 kilómetros) también fueron bloqueadas con tractocamiones y camiones de pasajeros. De acuerdo con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, estos incidentes fueron planeados como distractores y obligar a las autoridades a dividirse para atender ambos incidentes.
- Por su parte, los internos, al percatarse que en ese momento se intentaba liberarlos, comenzaron un motín al interior del centro. Si bien la mayoría de los internos que participaron en él sólo pretendían moverse al lugar en el que se encontraba el camión —para huir por la perforación de la barda de concreto—, de acuerdo con medios, otros aprovecharon para agredir a otros de los prisioneros por conflictos personales.
- Autoridades zacatecanas posteriormente confirmaron que ninguno de los internos logró evadirse, que no hubo asesinatos y el único interno que falleció, fue a causa de un ataque al corazón —supuestamente, por el pánico en prisión.

En las últimas semanas, la violencia en Zacatecas ha incrementado drásticamente: el 04 de diciembre fue asesinado el juez de Control adscrito al municipio Río Grande, Roberto Elías Martínez y el 24 de noviembre fue asesinado el coordinador estatal de la Guardia Nacional, el general José Silvestre Urzúa Padilla.

- Además, esta semana se identificaron videos publicados por supuestos miembros de “Grupo Flechas Operativas MZ”, un brazo armado subordinado a Ismael Zambada García, “El Mayo”, en el que se observa a aparentes miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados como parte de los intentos por erradicar su presencia del estado.
- El 06 de diciembre, aparentes sicarios efectuaron un ataque a personas que instalaban cámaras de videovigilancia frente a una base militar de la SEDENA en Apulco, Zacatecas.

La violencia en Zacatecas retrocedió después de un periodo exacerbado de violencia (tercer y cuarto trimestre de 2021; especialmente, durante el mes de noviembre del mismo año con 172 víctimas letales del crimen organizado). Esta disminución fue resultado de los operativos conjuntos en todo el estado, los que consiguieron que las dos organizaciones criminales disputantes —el Cártel de Sinaloa y el CJNG— fueran disuadidos de continuar su enfrenta por la alta probabilidad de ser detenidos.

- Sin embargo, como se ha observado en otros operativos ante disputas criminales, la disuasión situacional de la violencia sólo muestra efectos en periodos cortos de tiempo. Conforme autoridades van bajando la guardia y grupos criminales se acostumbran a la presencia de autoridades, la violencia aumenta de nuevo.



Vinculación de funcionarios con crimen organizado arriesga gobernabilidad en Morelos

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

Esta semana, Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos estuvo en el centro de la atención debido a una filtración del grupo de hackers *Guacamaya*. En un informe de la Unidad de Inteligencia Naval de la Armada de México datado de 2019, se indicaba la vinculación entre Carmona y *Los Rojos*, grupo criminal con presencia en el sur de la entidad. A modo de respuesta, el fiscal declaró que ese informe no tiene mayor sustento y que fue encomendado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco con el objetivo de hacerlo dimitir del cargo. Según Carmona, bajo su encargo, la FGE ha conseguido la captura de tres hijos del líder de Los Rojos, Santiago Mazarí Hernández *El Carrete* (detenido en agosto de 2019), además de 128 de sus integrantes.

El fiscal también ha efectuado acusaciones de colusión del crimen contra la oficina de la gubernatura estatal. Fue el caso de una carpeta de investigación abierta por la FGE, en la que se investigaba la posible colusión de Cuauhtémoc Blanco con gente del narcotráfico. Esta investigación inició en octubre de 2022 luego de la filtración de una fotografía en la que Blanco aparecía retratado con Irving Eduardo Solando Vera *El Profe* de **Guerreros Unidos**, Homero Figueroa Meza *La Tripa* del **Comando Tlahuica** y Raymundo Isidro Castro *El Ray*, del **CJNG**. En abril pasado, la Fiscalía de Morelos solicitó al Congreso local el desafuero de Blanco. Según diversas fuentes, Blanco habría permitido la entrada del **CJNG** a la entidad desde inicios de 2019, además de supuestamente haber entregado el control del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca a gente del Comando Tlahuica, organización dedicada a la extorsión. Aunado a ello, se registra que al menos 12 presidentes municipales están aliados con *Los Rojos* y 6 más con el **CJNG** en la zona noroeste de Morelos. Estas acusaciones también apuntan a la oficina de gobierno estatal e incluso a elementos del Congreso Estatal.

De manera paralela, se agrega el conflicto que detonaron los diferentes resultados de las necropsias realizadas por las Fiscalías de la CDMX y de Morelos, en el caso de la muerte de la joven Ariadna Fernández López, el pasado 30 de octubre. En noviembre, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Scheinbaum inició una confrontación con la FGE de Morelos por atraer el caso a la FGJCDMX ya que sus indagatorias sustentaban el caso como feminicidio (la FGE de Morelos resolvió que la mujer falleció por intoxicación de alcohol). Según esta última, hay indicios que señalan que la FGE de Morelos, encabezada por Carmona Gándara, estaría protegiendo al supuesto homicida. Después de unos días de confrontación, la FGR atrajo el caso para su respectiva resolución. Sin embargo, la guerra política en contra del fiscal registrada en días recientes es una prolongación de este conflicto.

En este contexto de presencia criminal en cabeceras municipales, gubernatura estatal y oficinas de procuración de justicia, se prevé que Morelos registre una intensificación de la violencia política a lo largo de 2023. Este estado se perfila con un importante riesgo a la gobernabilidad debido a la extendida presencia de organizaciones del crimen organizado. Esta situación podría agravarse por posibles conflictos internos entre grupos rivales. Incluso, hay información que avisan de la posible entrada de células del *Cártel del Noreste* y de la *Familia Michoacana*, con el objetivo de utilizar las rutas de la droga provenientes del norte de Guerrero y con destino al área metropolitana de la CDMX.